CRONOLOGÍA DE LA PROTESTA SOCIAL

PROTESTAS

BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS

JULIO 2020

COSTA RICA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

IIS Instituto de Investigaciones Sociales

ELABORACIÓN:
Comité de Seguimiento y Análisis de la Protesta Social y la Acción Colectiva

AUTORES:
Alejandro Alvarado Alcáza, Sofía Cortés Sequeira y Ronald Sáenz Leandro

FUENTES:
La Nación, La Extra, crhoy.com, SocialismoHoy

Cómo citar este documento: Alvarado, A.; Cortés, S. y Sáenz, R.. 2020. Costa Rica Cronología de la protesta social Julio 2020. San José: IIS-UCR. Disponible en http://www.protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/cronologias

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2003, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo conjunto con el programa Estado de la Nación inició con un proceso de discusión, diseño y elaboración de insumos para el seguimiento y análisis de la protesta social, en el cual se incluían la construcción de una base de datos de noticias sobre acciones colectivas, un manual de codificación de categorías sobre las distintas acciones colectivas, y ponencias para el capítulo sobre "Fortalecimiento de la Democracia" de los informes del programa. Posteriormente, en el año 2008, se constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLACSO[1], el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica, bajo la cual se prepararon las cronologías del conflicto social y los informes de coyuntura, como un insumo tanto para el seguimiento como para el análisis de la protesta social en Costa Rica. Desde finales de 2012, el IIS continuó con la producción de las cronologías mensuales, como una línea institucional en miras de propiciar el estudio de los conflictos sociales en el territorio costarricense. En esta dirección, las cronologías del conflicto social se producen usando como fuentes de registro de acciones colectivas, distintos medios de comunicación de prensa escrita. Por medio de resúmenes de las distintas expresiones de la protesta social, estas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y debate entre círculos académicos, organizaciones sociales y políticas y movimientos sociales en general.

1 El Observatorio Social de América Latina-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es un programa iniciado en el año 2000 para el "análisis crítico del capitalismo latinoamericano, los procesos políticos, sociales y económicos emergentes y las diversas formas de los conflictos y movimientos sociales en la región". Entre las áreas de trabajo de este programa, se encontraban los comités de seguimiento y análisis del conflicto social y la coyuntura, los cuales funcionaron hasta finales de 2012, cuando fueron cerrados debido a problemas de financiamiento.

RESUMEN DE LA PROTESTA SOCIAL COSTA RICA JULIO 2020

Se incluye como insumo para el seguimiento y análisis de la protesta social en el país, un conjunto de tablas resumen sobre el comportamiento de las acciones colectivas cada mes. Se registra información resumida sobre los principales tipos de acción colectiva, actores colectivos y demandas registradas por los medios de comunicación consultados. Para la construcción de las categorías hemos tomado como punto de partida el manual de codificación elaborado en el IIS-UCR para la clasificación de las acciones colectivas. De esta manera, se presenta un panorama general, en números, de la protesta social costarricense mes a mes, como material complementario de la cronología de la protesta social.

TABLA 1. TIPOS DE ACCIÓN COLECTIVA. JULIO 2020.

Tipo de acción	Cantidad (relativos - %)	Cantidad (absolutos)
Declaración pública	44,3	39
Marcha	25,0	22
Concentración	17,0	15
Bloqueo	4,5	4
Reunión con autoridades	4,5	4
Denuncia ante entidades nacionales o internacionales	2,3	2
Ciberacciones	1,1	1
Toma de propiedad	1,1	1
TOTAL	**100**	**88**

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado, Cortés y Sáenz. 2020. Cronología de la protesta social Julio 2020. Costa Rica: IIS-UCR

TABLA 2. TIPOS DE ACTOR COLECTIVO. JULIO 2020.

Tipo de acción	Cantidad (relativos - %)	Cantidad (absolutos)
GG. y OO. de trabajadores y trabajadoras	47,7	42
GG. y OO. de empresarios y empresarias	33,0	29
GG. y OO. de campesinos, campesinas e indígenas	4,5	4
GG. y OO. de ciudadanos y ciudadanas	2,3	2
GG. Y OO. de profesionales	2,3	2
GG. y OO. de usuarios y usuarias	2,3	2
GG. y OO. de vecinas y vecinos	2,3	2
Otros	5,7	5
TOTAL	**100**	**88**

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado, Cortés y Sáenz. 2020. Cronología de la protesta social Julio 2020. Costa Rica: IIS-UCR.

GG. y OO.* Grupos y/u organizaciones

TABLA 3. TIPOS DE DEMANDA. JULIO 2020.

Tipo de acción	Cantidad (relativos - %)	Cantidad (absolutos)
Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas	60,2	53
En favor o en contra de leyes, reglamentos, planes o decretos	9,1	8
Defensa de trabajo y condiciones laborales	8,0	7
Defensa de los derechos humanos	6,8	6
Intervención de gobierno	6,8	6
En favor o en contra de concesión, apertura y/o privatización	2,3	2
Mejora y/o defensa de los servicios públicos	2,3	2
Otros	4,5	4
Total	**100**	**88**

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado, Cortés y Sáenz. 2020. Cronología de la protesta social Julio 2020. Costa Rica: IIS-UCR.

TABLA 4. TIPOS DE ENTIDAD. JULIO 2020.

Tipo de acción	Cantidad (relativos - %)	Cantidad (absolutos)
Gobierno en general	61,4	54
Instituciones autónomas	9,1	8
Poder legislativo	6,8	6
Presidencia de la República	6,8	6
Ministerios	4,5	4
Gobierno local en general	2,3	2
Jerarcas de instituciones públicas	2,3	2
Contraloría General de la República	1,1	1
Empresas privadas	1,1	1
Entidad internacional	1,1	1
Instituciones reguladoras	1,1	1
Poder judicial	1,1	1
Población en general	1,1	1
Total	**100**	**88**

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado, Cortés y Sáenz. 2020. Cronología de la protesta social Julio 2020. Costa Rica: IIS-UCR.

CRONOLOGÍA DE LA PROTESTA SOCIAL
JULIO 2020[1]

MIÉRCOLES 1

Mediante un comunicado, la CCC se manifiesta en contra de la entrada en vigencia, a partir de este día, del cobro de un impuesto del 4% a los servicios de construcción. Considera que esto agravará la situación del sector de la construcción, que ya atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia.

La Asociación Costarricense de Pilotos Aviadores emite un comunicado en contra de la gestión de la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica (DGAC), ente al que responsabiliza por la caída en la calificación en aviación que tiene Costa Rica a nivel internacional. Esta calificación es realizada por la Federal Aviation Administration de los EE.UU. De acuerdo con el gremio de pilotos, esto pone en riesgo no solo sus trabajos, sino el de todas las personas que viven del turismo que proviene de los Estados Unidos, por lo que demandan cambios y mejoras en el ente rector de aviación.

Un grupo de personas trabajadoras de la delegación del OIJ de Grecia se manifiesta en las afueras de las instalaciones del edificio de dicha entidad judicial, en San José, en apoyo a la gestión de su actual director, Walter Espinoza, quien ha sido cuestionado en las últimas semanas por los protocolos de atención que maneja dicho cuerpo policial ante las denuncias de mujeres desaparecidas. Los y las manifestantes visten de negro, se arrodillan en las afueras del edificio, y portan carteles con estadísticas de resolución de crímenes que a su criterio respaldan la gestión de Espinoza. Su intención es también denunciar la violencia de género.

JUEVES 2

Mediante un comunicado conjunto, los sindicatos de las universidades estatales manifiestan su rechazo al informe de mayoría de la "Comisión Especial que Estudie, Analice y Eventualmente Proponga Proyectos de Ley o Reformas en Relación con la Administración del FEES", de la Asamblea Legislativa. Denuncian que dicha comisión legislativa es una excusa para atentar contra la autonomía universitaria y el modelo de educación superior pública del país, y consideran que el dictamen de mayoría emanado de la misma está basado en una serie de prejuicios y juicios de valor, y que no cuenta con respaldo técnico.

MIÉRCOLES 3

La UNDECA publica una denuncia por la presunta escasez de equipo de protección personal para los y las trabajadoras de la salud en los centros de atención médica del país, así como de pruebas de diagnóstico del COVID-19.

[1] Cómo citar este documento: Alvarado, A.; Cortés, S. y Sáenz, R. 2020. Costa Rica Cronología de la protesta social Julio 2020. San José: IIS-UCR. Disponible en http://www.protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/cronologias

El personal de sala de operaciones del Hospital Calderón Guardia realiza una reunión con el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, con el fin de solicitar el otorgamiento de equipo de protección personal, como mascarillas N95, para protegerse adecuadamente contra posibles contagios de COVID-19 en las instalaciones del hospital. En la reunión se abordan todas las dudas e inquietudes del personal en esta dirección, y se establece un compromiso por parte de las autoridades de la CCSS de suministrar adecuadamente los centros de salud con dicho equipo.

JUEVES 4

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) califica la renuncia del viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, así como de otras autoridades del MICITT, como una amenaza a la seguridad jurídica y a la institucionalidad de la industria de telecomunicaciones. La cámara considera que este sector es un actor fundamental en la atención de la emergencia sanitaria y económica desatada por el impacto del COVID-19, y que el gobierno de Carlos Alvarado parece no entender la relevancia actual del mismo. Hacen un llamado a que se garantice la transparencia y la seguridad jurídica para ofrecer más y mejores servicios de telecomunicaciones a la población.

LUNES 6

Un grupo de trabajadores del servicio de recolección de basura de la Municipalidad de San José realiza un paro de labores como medida de protesta, ya que denuncian que la municipalidad no les ha otorgado implementos de protección, tales como mascarillas, jabón o alcohol en gel para realizar su trabajo de manera segura y evitar contagios por COVID-19. Los trabajadores se congregan en las afueras de las instalaciones de la municipalidad en San José.

La UCCAEP emite un documento público que envía al presidente Carlos Alvarado con 13 propuestas para garantizar la estabilidad financiera de la CCSS. Entre estas se contempla el establecimiento de un salario único para las personas trabajadoras de la institución, que las contrataciones por la emergencia sanitaria del COVID-19 no sean permanentes, y tercerizar servicios.

MIÉRCOLES 8

Un grupo de oficiales de la Policía Penitenciaria del centro penal Carlos Luis Fallas en Pococí, se manifiesta luego de su jornada laboral, frente al hospital de Guápiles para exigir a las autoridades que les hagan la prueba del COVID-19 luego de que tuvieran contacto con un compañero de trabajo y tres privados de libertad que dieron positivo al virus. El grupo de oficiales manifiesta que la misma les fue negada cuando la solicitaron a sus jefaturas, y tampoco se les ha brindado un protocolo de seguridad antes de volver a sus hogares, lo que consideran pone en riesgo de contagio a sus familias.

El SEC hace un llamado a los y las educadoras a declararse en estado de "resistencia nacional", ante las políticas que el gobierno ha impulsado, amparado en el contexto de la pandemia, que lesionan sus condiciones laborales.

La Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) solicita que se muestre la certificación de calidad de las mascarillas KN95 que el gobierno de Carlos Alvarado recibió de la República Popular de China, ya que desconfían que estas sean aptas para su uso entre el personal médico y brinden las mismas condiciones de seguridad que las N95.

La Asociación Consumidores de Costa Rica solicita al MEIC que legalice de manera permanente la práctica de realizar promociones de la bolsa de arroz junto con otros productos, ya que argumentan que esta medida actúa en beneficio de las familias de menores recursos.

La FEDECÁMARAS solicita que, en el marco del impacto económico de la crisis del COVID-19, la CCSS extienda una prórroga amplia para que no se aporte del 20% de prima que exige la entidad en los arreglos de pago, así como que mantenga la base mínima contributiva que establece un 75% de la fijada por la ley. Asimismo, solicita al Ministerio de Hacienda aprobar una nueva prórroga al cobro del IVA a los alquileres de negocios comerciales.

JUEVES 9

Un grupo de transportistas dedicados al transporte de escolares se manifiesta en diversos puntos del país para exigir que se les cancele el pago de compensaciones que se desprende del acuerdo que alcanzaron con el MEP en el mes de junio. Los y las manifestantes señalan una falta de lineamientos claros para poder cobrar el pago en los centros educativos, lo que ha provocado que un grupo no haya percibido aún su compensación económica debido al impacto de la pandemia del COVID-19 en el ciclo escolar. Por su parte, el MEP niega tal descoordinación, y solicita a los y las transportistas reportar a los centros educativos que no les estén girando el dinero.

La Asociación Voz del Pueblo de Bagaces envía una carta al ministro de Salud, Daniel Salas, para solicitar que esta entidad investigue la contaminación con arsénico del agua potable que consumen en la comunidad de Bagaces, y el daño que esto estaría provocando en los riñones de algunas personas.

Las organizaciones del gremio de taxistas demandan al Ministerio de Hacienda ante la CGR, por una supuesta complacencia, tolerancia, inacción y complicidad con la operación de plataformas ilegales de transporte de personas, las cuales estarían evadiendo impuestos de manera notoria. Además, denuncian que tanto el Gobierno de Carlos Alvarado como la Asamblea Legislativa les han dejado en completo abandono.

Un grupo de familias maleku inicia un movimiento de recuperación de tierras del Territorio Indígena Maleku, ubicado en Guatuso de Alajuela. Emigdio Cruz, presidente de la ADI, manifiesta que han decidido seguir el

ejemplo de Salitre, que ante la inacción de los últimos gobiernos, han procedido a recuperar por su cuenta las fincas que dentro de su territorio actualmente se encuentran en manos de personas no indígenas.

VIERNES 10

La CCC solicita al gobierno de Carlos Alvarado que las medidas de cierre anunciadas para intentar contener el aumento de contagios de COVID-19 en la GAM rijan solo por una semana, ya que si se extienden más provocarían una mayor pérdida de empleos en el sector construcción.

La CEDET solicita que se incluya a las empresas de su sector en la exoneración del cobro del IVA que es impulsado en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa se analizan dos proyectos de ley referentes a exonerar por seis meses el consumo de energía, pero según la CEDET, la exoneración del IVA en la tarifa eléctrica residencial debe analizarse con cuidado para que realmente sea un beneficio para las familias y no se convierta en un perjuicio que provoque un aumento mayor en las tarifas poco después, perjudicando más bien a quienes se quiere ayudar.

Un grupo de transportistas unitarios bloquea la frontera con Paso Canoas como medida de protesta ante lo que consideran un trato desigual con Panamá, esto porque afirman que Costa Rica permite a los transportistas de Panamá salir cargados hacia su país, mientras que los costarricenses no pueden hacer lo mismo. Para la CCTU, esta situación estaría violando el principio de reciprocidad previamente garantizado en una reunión con la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, y el director de Aduanas, Gerardo Bolaños.

Este día, representantes de agrupaciones de izquierda y de otras organizaciones políticas, sociales y sindicales, se manifiestan frente a la Embajada de Argentina para exigir la liberación de Sebastián Romero, trabajador argentino detenido por su participación en las protestas contra la reforma a las pensiones ocurridas en 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri. El grupo entrega un documento dirigido a Alberto Fernández, presidente de Argentina, y en apoyo a la solicitud de la defensa de Romero para que se cambien las medidas dede régimen de detención.

LUNES 13

Un grupo de ciudadanas y ciudadanos organizados se manifiesta frente a Casa Presidencial por las medidas restrictivas del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Entre otras cosas, las y los manifestantes solicitan al presidente de la República, Carlos Alvarado, el fin de las restricciones para la atención de la pandemia, la presentación de una ruta clara para la reactivación económica, así como la detención de las negociaciones con el FMI con respecto al otorgamiento de un préstamo al Estado costarricense.

En un comunicado conjunto, el COIN, el FRENAPI y la COCOFA piden acciones urgentes al gobierno para proteger a la población indígena Maleku, la cual ha recibido amenazas desde que varias de sus familias iniciaron

un proceso para reinstalarse en su territorio. Estas organizaciones responsabilizan al Estado costarricense ante cualquier situación violenta que pueda desencadenarse, esto debido a la experiencia de agresiones a comunidades indígenas en otras zonas del país que se han dado con la inacción de las autoridades.

MARTES 14

Un grupo de vecinas y vecinos que habitan en los alrededores de la autopista General Cañas realiza un bloqueo en la vía como forma de presión para exigir el testeo masivo de COVID-19 en los barrios de la zona. Con esta acción, las personas manifestantes denuncian la poca presencia del MINSA, ya que afirman que a lo largo de los últimos días han conocido de casos positivos por COVID-19 en comunidades aledañas. En el lugar se hace presente la Policía de Tránsito para regular la situación.

JUEVES 16

En un comunicado, la CANABUS solicita al gobierno declarar en "estado de calamidad" al sector, dadas las condiciones de la crisis económica que enfrentan asociada al COVID-19. La organización asegura que en medio de la crisis sanitaria la demanda de pasajeros se ha reducido y muchas empresas no cuentan con capacidad financiera para subsistir en medio de la emergencia. Por esta razón, han enviado al Poder Ejecutivo una serie de peticiones, entre las que se incluyen el establecimiento de una política de subsidios, la facilidad de créditos y la disminución en el pago de los cánones a la ARESEP.

En un comunicado, la ASDEICE convoca a una protesta vehicular para el 27 de julio en protesta contra los planes del gobierno de reducir el salario a los empleados públicos en el marco de la crisis por el COVID-19. Para la organización sindical, el objetivo es que los agremiados se unan en caravana, mediante automóviles o motocicletas.

VIERNES 17

En un comunicado, la CCCR le solicita al Gobierno permitir la apertura de restaurantes y comercios que han aplicado protocolos sanitarios en cantones con alerta naranja, luego del anuncio del cierre por un período mayor al originalmente estipulado. Para la cámara empresarial, mantener las puertas cerradas implica que muchas familias corran el riesgo de no recibir ingresos en las próximas semanas.

Mediante un pronunciamiento, la CACORE le pide al Gobierno permitir la venta en la modalidad para llevar y el autoservicio como opción para contener el desempleo, suspensión de contratos y reducción de jornadas que sufre el sector por la pandemia del COVID-19. De esta forma, el grupo de representantes de restaurantes manifiesta su total disconformidad con las restricciones implementadas por el Gobierno, las cuales aplicarán hasta finales de julio.

A través de una carta remitida al presidente de la CNE, Alexander Solís, el Alcalde de Pococí, Manuel Hernández, solicita que se levante la alerta naranja en el cantón para poder reactivar la economía. En el documento se argumenta que la población ha cumplido con las normas de higiene y hacen un enorme esfuerzo para evitar los contagios por COVID-19, por lo que le piden que revalúen la condición de alerta en su cantón, ya que según afirman, esta medida es desigual dado que otros cantones con las mismas o peores condiciones, no han sido declarados con la misma condición especial.

La FECOPROBE interpone un recurso de amparo en contra de las medidas sanitarias que ha establecido el gobierno para contener la propagación del COVID-19. Por este medio, las y los profesionales en belleza expresan la molestia de no poder trabajar, esto debido a la situación crítica en que se encuentran las finanzas de una gran cantidad de personas que se dedican al estilismo.

LUNES 20

Varios grupos de representantes de gimnasios y estilistas se manifiestan a las afueras de Casa Presidencial para solicitarle al gobierno que flexibilice las medidas de restricción sanitaria en estos negocios por distintos motivos, entre ellos por el impacto económico y en la salud de las personas. En la manifestación se hace presente la Fuerza Pública para corroborar los protocolos de distanciamiento social.

En un comunicado, la UNGL le reclama al gobierno la imposición de la alerta naranja en varias comunidades del país al considerar que las restricciones están afectando fuertemente al comercio, por lo que solicitan un punto de equilibrio en el manejo de la pandemia. La protesta del sector municipal ha crecido luego del pronunciamiento en el que la CNE determinara la eliminación de la alerta naranja ante el aumento exponencial de casos de COVID-19 en el país.

MARTES 21

Un grupo de personas empresarias del cantón de Santa Ana protesta en las afueras de la casa de habitación del presidente Carlos Alvarado, ubicada en ese mismo, para solicitarle al mandatario que autorice la reapertura de negocios. Durante la protesta, las y los manifestantes entregan un documento al presidente, quien mantiene un diálogo con el grupo. En el escrito, se comprometen a cumplir con todas las medidas sanitarias necesarias para el debido funcionamiento de sus establecimientos. Asimismo, solicitan que se tomen acciones para apoyar al sector tales como una moratoria en el pago de alquileres y la condonación de deudas en electricidad, teléfono, etc. Todas las personas cumplen con los protocolos de distanciamiento y uso de protección mientras se desarrolla la manifestación.

En San Ramón, un grupo de personas empresarias instala bloqueos intermitentes sobre la ruta 1 que conecta la capital San José con el Occidente del país, como medida de presión para que el Poder Ejecutivo permita la reapertura comercial en el cantón. Según las personas manifestantes, la declaratoria de alerta naranja definida

para San Ramón y las consiguientes medidas de restricción que sólo permiten el funcionamiento de negocios como supermercados, panaderías, carnicerías, entre otros, las mantiene en una situación económica crítica.

Públicamente, la UNDECA emite un llamado a sus agremiados y agremiadas a sumarse a la protesta vehicular programada por las organizaciones sindicales para el 23 de julio. Los sindicatos, en su mayoría del sector público, tomaron la decisión de retomar las manifestaciones callejeras con una caravana de vehículos para oponerse a las medidas económicas propuestas por el gobierno para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia y que, según denuncian, se recargan sobre los sectores laborales y el pequeño y mediano comercio.

Frente a la Casa Presidencial, personas dueñas y trabajadoras de comercios tales como gimnasios, barberías y salones, entre otros, también protestan para solicitarle al gobierno que permita la reapertura de sus negocios, incluso en los cantones con declaratoria de alerta naranja. Dichos sectores denuncian los estragos económicos causados por los cierres y la urgencia de retomar sus negocios.

En Los Chiles, personas dueñas de comercios marchan sobre las principales calles de la ciudad para demandar la reapertura de locales comerciales y el cambio de estatus del cantón de alerta naranja a amarilla. Asimismo, solicitan a la municipalidad que interceda ante el gobierno para que se tomen dichas medidas. Durante la protesta, las y los manifestantes se hacen presentes a la sesión de Concejo Municipal y entregan un documento a las autoridades municipales.

Al igual que en otros cantones, personas empresarias y habitantes de Upala marchan para solicitar la reapertura comercial en los distritos que no presentan problemas de contagio. Solicitan el apoyo de la municipalidad para interceder ante el gobierno de la República. Sostienen que no se justifica mantener a todo el cantón bajo alerta naranja, cuando los casos se concentran en ciertos lugares.

MIÉRCOLES 22

Los representantes de centros comerciales se unen a los distintos sectores que solicitan al gobierno de la República permitir la reapertura comercial en los cantones con alerta naranja, la mayoría de los cuales se ubica en la Gran Área Metropolitana. El grupo CECO que representa a los principales centros comerciales del país, emite un comunicado de prensa en el que indica que la situación se torna "insostenible" y los impactos sobre el empleo y los ingresos siguen creciendo.

Diferentes sectores de la provincia de Limón confirman que estarán participando de la jornada de protestas programada para el 23 de julio. Se espera que a la caravana vehicular se sumen desde las personas trabajadoras del sector público hasta distintos sectores empresariales.

El SINAE emite un comunicado de prensa en el que solicita que se tomen medidas para atender la situación que se está presentando en el hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, tras la confirmación de 13 casos positivos de COVID-19 y el aislamiento de otras 18 personas por sospecha de contagio. Ante esto, el sindicato

pide que se cambien los lineamientos de manejo y uso de equipo de protección personal en el hospital, pues hasta el momento la CCSS sólo entrega este tipo de equipo a las personas funcionarias que atienden casos positivos de COVID-19, pese a que el país se encuentra en fase de transmisión comunitaria.

Un grupo de personas trabajadoras de las áreas de mantenimiento y seguridad del hospital Calderón Guardia, con el apoyo de la UNDECA, protesta en las afueras de ese hospital contra lo que interpretan como una intención de privatizar la contratación de esos servicios para la nueva torre que se habilitará para la atención de personas con COVID-19 en ese mismo centro médico. Según explican, durante la conferencia de prensa en la que se anunció la contratación de personal para dicha torre, Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, no mencionó a los servicios de mantenimiento y seguridad, por lo que interpretan que la intención es contratar a empresas privadas para prestar este tipo de servicios.

Personas trabajadoras de casinos se suman a las distintas protestas organizadas para demandar la reapertura comercial. Sostienen que en el caso de los comercios para los que laboran, suman cuatro meses cerrados y sin generar ingresos para sus familias. La manifestación toma lugar en San José.

JUEVES 23

Este día, grupos sindicales aglutinados en el BUSSCO se movilizan en caravanas por distintos puntos del país. La protesta principal toma lugar en San José, donde las personas se trasladan en vehículos, mientras protestan contra las medidas económicas propuestas por el gobierno de Carlos Alvarado para hacer frente a los efectos de la crisis por el COVID-19. Para los sindicatos, dichas medidas cargan sobre las personas trabajadoras y los sectores de menores ingresos la responsabilidad de combatir la emergencia. Exigen que se tomen acciones para cobrar más impuestos a los sectores de más ingresos y a las grandes empresas. Otras caravanas se reportan en Alajuela, Heredia, Cartago, Palmar, Siquirres, Naranjo, Puerto Viejo, Barranca, Turrialba, Buenos Aires, Liberia y Pérez Zeledón.

Nuevamente, un grupo de personas protesta frente a la casa de Carlos Alvarado, presidente de la República. En este caso se trata de personas propietarias y trabajadoras de servicios de lavado de carros, quienes solicitan que se permita la reapertura de sus comercios.

Un grupo de comerciantes de Pococí emite un comunicado público en el que manifestan que estarán protestando para reclamar la reapertura comercial en su comunidad. Según este grupo, buscan que se de un balance entre el manejo sanitario y el económico de la pandemia, pues hay muchas familias que dependen de sus salarios.

Mediante un comunicado de prensa, el COLPER critica la estrategia de comunicación implementada por el gobierno durante la pandemia y señala que el manejo dado por el Poder Ejecutivo constituye un "retroceso en los derechos a la libertad de información". Ante esto solicitan que se informe sobre la estrategia que sigue el gobierno en materia de comunicación.

Miembros de la ASOBAREST también protestan para exigir la reapertura de bares y restaurantes en todo el país. Lo hacen con una concentración en las cercanías de la Casa Presidencial. Este sector señala que tras 4 meses de cierre de sus comercios, los efectos han sido muchos sobre los ingresos de las personas y familias que dependen de estos negocios.

Este día, alcaldes y personas trabajadoras de diferentes municipalidades del país, tales como la de San José, Belén, Santa Ana, Goicoechea, San Ramón, Paraíso y Tilarán, protestan en el centro de San José con una caravana para denunciar los efectos que los recortes presupuestarios propuestos para los gobiernos municipales, tendrían sobre su funcionamiento y la ejecución de obras públicas estratégicas como la red vial cantonal. Según denuncian, en el presupuesto extraordinario presentado por el gobierno a la Asamblea Legislativa, se estarían rebajando unos ¢26 mil millones, a los cuales podrían sumarse otros recortes desde el Ministerio de Hacienda.

VIERNES 24

La UCCAEP dirige un llamado al gobierno de la República para solicitar la reapertura económica en el país, particularmente en los cantones bajo declaración de alerta naranja. Para los 48 gremios empresariales representados en la UCCAEP, la reapertura debe darse bajo el seguimiento de estrictos protocolos sanitarios, pero dándole la posibilidad a los comercios de funcionar, pues los impactos económicos sobre los ingresos y el empleo se han acentuado durante los últimos meses. También piden al gobierno aportar su "cuota de sacrificio" pues, según sostienen, el sector público y el déficit fiscal son de de los generadores de la crisis económica en el país.

En conferencia de prensa, representantes de sectores comerciales como la Cámara de Comercio de Costa Rica y la CACORE cuestionan las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno durante las últimas semanas y exigen la reapertura comercial en el país. Entre otras cosas, cuestionan al presidente Alvarado y al gobierno por no tener conocimiento sobre el funcionamiento de una empresa. Asimismo, sostienen que no creen en el "falso dilema de escoger entre salud y trabajo". Para todo el sector comercial se estiman pérdidas superiores a los $1850 millones.

Enrique Egloff, presidente de la CICR, denuncia públicamente al gobierno de Carlos Alvarado por incumplir el pacto que tenía con los sectores empresariales de consultarles sobre medidas de restricción sanitaria. Según Egloff, miembros del gabinete, no cumplieron con este acuerdo, pese a que el empresariado les "tomó la palabra". Asimismo, la CICR insiste en la urgencia de la reapertura comercial en el país.

SÁBADO 25

La ANEP convoca a una manifestación vehicular para el 27 de julio con una agenda de demandas de "contenido abierto". Según la fuente consultada, el sindicato hace un llamado a la participación de los distintos sectores que se sienten perjudicados por la política económica del gobierno en el marco de la pandemia.

Familiares de Allison Bonilla, joven desaparecida desde el mes de marzo, convocan a una protesta pacífica para demandar respuestas. El 4 de marzo en horas de la noche, Bonilla desapareció tras bajarse del bus en el que se trasladaba a su casa ubicada en Ujarrás. Pese a que las autoridades han dado con indicios sobre la desaparición, no se ha determinado su paradero tras cinco meses. La marcha convocada se partirá precisamente de la parada de autobus donde se presume que Bonilla fue secuestrada.

El SINAE denuncia que la CCSS contrata servicios privados de lavandería mientras mantiene al personal de la lavandería central de la institución sin trabajar. Señala que recientemente la Gerencia de Logística contrató este tipo de servicios por un monto de $60 mil, pese a que no se cumple ninguna de las condiciones que la misma institución fijó para contratar este tipo de servicios a oferentes privados. Por su parte, en la CCSS argumentan que la contratación obedeció a las circunstancias presentadas por la pandemia y a que en la lavandería central se ha rebasado la capacidad instalada.

DOMINGO 26

Por medio de un comunicado de prensa, diferentes cámaras y asociaciones de empresarios autobuseros anuncian que estarán protestando el 29 de julio para exigir apoyo del gobierno para su sector. Se trata de la Asociación Cámara de Autobuseros y Transportistas Unidos de la Provincia de Guanacaste, la Asociación Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas Autobuseras de Ruta Regular, la Cámara de Autobuseros y la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios de Transporte Público, las cuales solicitan que el Estado, en tanto socio de las empresas de transporte público, cumpla con sus obligaciones de garantizar la estabilidad y equilibrio financiero del sector.

Tal como se anunció, familiares de Allison Bonilla, junto a otras personas, organizan una marcha para exigir el esclarecimiento de la desaparición de la joven de 18 años, ocurrido hace cinco meses en Cachí, Cartago. Yendry Vázquez, madre de Allison, declara que "Con la marcha de hoy [domingo 26] queremos alzar la voz por mi hija y por todos los desaparecidos. A los que les quitaron la voz, los sueños y sus vidas (...) Queremos caminar por los que no terminaron su camino".

LUNES 27

La Fedecamaras se pronuncia públicamente para solicitar al gobierno de la República la reapertura comercial. Dicha cámara, la cual representa a unas 6 mil empresas, sostiene que el sector se encuentra en un "coma inducido" debido a las medidas de restricción sanitaria implementadas.

La familia de Luany Salazar, joven víctima de un femicidio ocurrido en Desamparados, convoca a una protesta en la Plaza de Justicia del Poder Judicial para el 28 de julio. Según Patricia Zamora, madre de Luany, la manifestación pretende exigir que se incrementen las penas de cárcel en los casos de femicidio y hacer

conciencia entre las instituciones estatales y la ciudadanía en general sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en el país.

Con la participación de la ANEP, personas agricultoras y trabajadoras, particularmente de plataformas digitales, toma lugar la manifestación convocada días atrás para exigir al gobierno de la República un cambio de rumbo de las medidas económicas que hasta el momento se han implementado para enfrentar la pandemia. Según denuncian, el gobierno de Carlos Alvarado no muestra ninguna disposición al diálogo y solo escucha a las cámaras empresariales, lo cual se ha traducido en propuestas perjudiciales para los sectores trabajadores y populares.

MARTES 28

Frente a la Asamblea Legislativa, personas dedicadas a la agricultura, con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, protestan para exigir al congreso la aprobación de la propuesta de ley que pretende la exoneración por 1 año del pago del IVA a la canasta básica. También solicitan la aprobación de otros proyectos para apoyar al agro frente a la situación que enfrentan como consecuencia de la pandemia, incluyendo temas como la moratoria de deudas. Algunas de las personas participantes asisten con sus tractores, los cuales estacionan frente a la sede legislativa. Según una de las fuentes consultadas, las diputadas Karine Niño (PLN) y Shirley Díaz (PUSC) y el diputado Erwen Masís (PUSC), presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, sostienen un diálogo con las y los manifestantes. En particular, el diputado Masís se compromete con las y los manifestantes a impulsar prontamente el trámite de los proyectos para que sean conocidos en el plenario legislativo.

Trasladándose en caravana sobre las principales calles de la capital, autobuseros pertenecientes a distintas cámaras y asociaciones protestan para exigir al gobierno medidas de apoyo al sector. Según indican, sus ingresos se han reducido hasta en un 70% como consecuencia de la pandemia y el gobierno sigue sin hacer propuestas concretas. Además señalan que, pese a la merma en el transporte de personas, deben seguir pagando los cánones de funcionamiento. Entre las medidas que solicitan, se encuentra la de un subsidio para el sector. La protesta es organizada con la participación de la Asociación Cámara de Autobuseros y Transportistas Unidos de la Provincia de Guanacaste, la Asociación Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas Autobuseras de Ruta Regular, la Cámara de Autobuseros y la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios de Transporte Público. Según una de las fuentes consultadas, a la caravana se suman personas agricultoras con sus tractores, las cuales también se encuentran protestando en el centro de San José.

La Asociación Consumidores de Costa Rica solicita al gobierno de la República un cambio en la política de control migratoria en los pasos oficiales de frontera. Según esta asociación, la estrategia seguida hasta el momento no ha dado los resultados esperados en la contención de los flujos migratorios, particularmente los irregulares, por lo que urge que se mejoren los controles. En este sentido, propone "Endurecer el control y el seguimiento migratorio por medio de las empresas legalmente constituidas, usando una estrategia de

embudo en el flujo migratorio, es urgente para el país". La propuesta, según reporta la fuente consultada, fue dirigida al presidente de la Repúblicas y a las autoridades de las carteras de Salud, Planificación, Economía, Trabajo y Seguridad.

MIÉRCOLES 29

Familiares de Luany Salazar, joven víctima de femicidio, protestan, con la participación de otros sectores solidarios, en la Plaza de Justicia de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en el centro de San José. Las y los manifestantes exigen un mejor manejo de los casos de femicidio y, en general, de violencia contra las mujeres. A la protesta se suma la mamá de Allison Bonilla, joven que permanece desaparecida desde marzo, cuya familia también organizó una protesta recientemente.

El sector comercial, representado en la Cámara de Comercio de Costa Rica, se manifiesta en contra de la decisión del gobierno de la República de permitir la reapertura comercial en agosto, pero sólo por un período de 19 días en el caso de los cantones bajo alerta naranja. En conferencia de prensa, el poder ejecutivo informó que durante el mes de agosto el país alternaría medidas con el fin de mantener el mayor control posible sobre la pandemia mientras se facilita la reapertura comercial en el país. Para los cantones en alerta naranja esto se traduce en un período de 12 días, entre el 10 y el 21 de agosto, en el que no podrán abrir. Dentro de este período se incluye la celebración del Día de la Madre, lo cual causa la molestia del sector empresarial que esperaba esta fecha para recuperar parte de las pérdidas ocasionadas por las restricciones sanitarias. Para los cantones bajo alerta amarilla, se permite la reapertura comercial siguiendo los protocolos correspondientes durante todo el mes de agosto.

La CACORE también se manifiesta en contra de las medidas anunciadas por el gobierno para el mes de agosto como parte de las acciones para contener la pandemia. Para este sector, urge la reapertura "total" de la economía, permitiéndole a bares y restaurantes funcionar todos los días.

De manera conjunta, el SITRAA y la ASTRAA emiten un comunicado público en el que critican la gestión de Yamileth Ángulo al frente del AyA. El posicionamiento se da luego de que la prensa informara la condena de la que fue objeto la institución en un arbitraje con una empresa española, por la que deberá pagar un monto de $6,7 millones. A este hecho, según los sindicatos, se suman otros problemas de gestión, por lo que piden que el poder ejecutivo tome acciones inmediatas para corregir la situación.

Un grupo de personas extrabajadoras del hotel El Rey, situado en el centro de San José, reclama el pago de prestaciones. Según denuncian, la empresa las despidió desde el pasado mes de marzo, debido a la pandemia, pero no les ha cancelado lo adeudado. También señalan que son constantes las justificaciones, cuando se comunican con la empresa para consultar sobre el pago.

VIERNES 31

Cerca de las 6:30 de la mañana, un grupo de comerciantes instala un bloqueo sobre la ruta 27 a la altura de Santa Ana. El grupo reclama al gobierno la reapertura comercial y que se les permita funcionar bajo mejores condiciones. En concreto, piden trabajar todos los días hasta las 10 p.m. y que elimine el cobro del IVA en las transacciones con tarjeta. Durante la manifestación, se registra una acción policial para retirar el bloqueo que concluye con 6 personas detenidas y trasladadas a los Tribunales de Flagrancia. Consultado sobre el tema, el presidente de la República, dice, en conferencia de prensa, que no está de acuerdo con la respuesta policial y que su gobierno prioriza el diálogo con las personas que protestan.

Un grupo de personas que se dedica al transporte de estudiantes marcha hacia Casa Presidencial con el fin de exigir que se les permita dedicarse al transporte de turistas, pues debido a la suspensión de clases presenciales ocasionada por la pandemia, suman cinco meses de no laborar. Para este fin, solicitan que el CTP emita una resolución en la que se les autorice a transportar turistas y otros bienes como comestibles, como una forma de ofrecer una solución para el sector. También piden que no se les cobre el canon correspondiente al 2021. La manifestación, nombrada como de "las placas caídas", es organizada por la Asociación de Transportistas de Estudiantes y la Asociación Nacional de Transportistas. Quienes participan portan pancartas en las que muestran el número de placa de sus unidades y su lugar de origen.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADI	Asociación de Desarrollo Indígena
ARESEP	Autoridad Reguladoras de los Servicios Públicos
ASDEICE	Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía
ASOBAREST	Asociación de Bares y Restaurantes
ASTRAA	Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
AyA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
BUSSCO	Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense
CACORE	Cámara Costarricense de Restaurantes
CANABUS	Cámara Nacional de Autobuseros
CCC	Cámara Costarricense de la Construcción
CCCR	Cámara de Comercio de Costa Rica
CCSS	Caja Costarricense del Seguro Social
CCTU	Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios
CEDET	Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones
CICIR	Cámara de Industrias de Costa Rica
COLPER	Colegio de Periodistas de Costa Rica
CGR	Contraloría General de la República
CNE	Comisión Nacional de Emergencias
COCOFA	Comisión Coordinadora y Facilitadora
COIN	Congreso Indígena Nacional

CTP	Consejo de Transporte Público
EE.UU	Estados Unidos
FECOPROBE	Federación Costarricense de Profesionales en Belleza
FEES	Fondo Especial para la Educación Superior Pública
FEDECÁMARAS	Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica
FMI	Fondo Monetaria Internacional
FRENAPI	Frente Nacional de Pueblos Indígenas
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MEP	Ministerio de Educación Pública
MICITT	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
MINSA	Ministerio de Salud
PLN	Partido Liberación Nacional
PUSC	Partido Unidad Socialcristiana
SEC	Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense
SINAE	Sindicato Nacional de Enfermería
SITRAA	Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
OIJ	Organismo de Investigación Judicial
UCCAEP	Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada
UNDECA	Unión Nacional de Gobiernos Locales
UNGL	Unión Nacional de Gobiernos Locales

ELABORACIÓN

Grupo de Trabajo PROTESTAS

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica

COORDINACIÓN:

Alejandro Alvarado Alcázar.

RELEVAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN:

Alejandro Alvarado Alcázar, Sofía Cortés Sequeira y Ronald Sáenz Leandro

EDICIÓN:

Alejandro Alvarado Alcázar

DIAGRAMACIÓN:

Andrés Artavia Tencio

Fuentes: Diario Extra, La Nación, crhoy.com, SocialismoHoy

PROTESTAS

BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS

VISITE: WWW.PROTESTAS.IIS.UCR.AC.CR

CONTACTO: PROTESTAS.IIS@GMAIL.COM